

Inclusión financiera: Avances, retos y su impacto en la libertad económica

Columna de Armando Zúñiga Salinas,
Vicepresidente Nacional de Coparmex,
Presidente de ASUME y Grupo IPS, Consejero
del CCE y Concamin.

El acceso y uso de los servicios financieros en México mostró avances importantes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, aún existen desafíos y áreas de oportunidad para lograr una mayor integración de personas y sectores de la población.

Para dimensionar el panorama actual, resulta clave comparar estos avances con los objetivos establecidos en la Política Nacional de Inclusión Financiera 2020 - 2024, que tomó como referencia la situación del país en 2018.

Uno de los aspectos más relevantes es la salud financiera, entendida como la capacidad de los individuos para gestionar sus recursos de manera eficiente, afrontar imprevistos económicos y aprovechar oportunidades de crecimiento.

Aunque en la mayoría de los indicadores se han registrado mejoras, preocupa la disminución en la tenencia de seguros, que pasó del 25 % al 23 % en seis años. Esta caída evidencia una persistente vulnerabilidad ante eventos inesperados, especialmente en las regiones con menor desarrollo.

En cuanto al acceso a productos financieros, los datos muestran avances notables. El porcentaje de adultos con al menos un producto financiero aumentó de 68.3 % a 76.5 %, acercándose a la meta del 77.2 % establecida en la estrategia nacional. Un crecimiento similar se observa en la tenencia de cuentas de ahorro, que pasó de 47.1 % a 63.0 %. Estos resultados reflejan el impacto positivo de la digitalización bancaria y de las estrategias de acceso y educación financiera impulsadas en los últimos años.



“La inclusión financiera brinda a las personas herramientas para emprender, invertir y tomar decisiones autónomas sobre su futuro, reduciendo su dependencia de soluciones informales como prestamistas con tasas abusivas”.

Armando Zúñiga Salinas,

@Armando_ZunigaS

Además, mientras que en la región noreste el 71.3 % de la población cuenta con una cuenta de ahorro, en el sur del país solo el 55.5 % tiene acceso a este servicio, lo que subraya la concentración de infraestructura financiera en zonas urbanas y económicamente más dinámicas.

El crédito también ha evolucionado, con un 37.3 % de la población utilizando algún tipo de financiamiento. Sin embargo, la mayoría de estos créditos se concentran en tarjetas departamentales (22.6 %) y bancarias (15.7 %), lo que indica que la deuda de consumo sigue superando al financiamiento productivo. Además, un 38.4 % de quienes no tienen crédito rechaza endeudarse, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer la educación financiera para fomentar el uso responsable del crédito como una herramienta de desarrollo.

Otro aspecto clave es la digitalización de los servicios financieros. El uso de aplicaciones móviles para realizar consultas y transacciones creció del 54.3 % en 2021 al 69.1 % en 2024, y las transferencias electrónicas han aumentado considerablemente. Esto refleja tanto la persistente desconfianza en los medios digitales como la falta de infraestructura adecuada para pagos electrónicos en ciertas regiones. Sin embargo, el efectivo sigue siendo el principal medio de pago por su facilidad de uso en transacciones cotidianas.

Estos avances y desafíos no solo impactan el desarrollo económico del país, sino que también tienen implicaciones en la libertad económica de la población. La inclusión financiera brinda a las personas herramientas para emprender, invertir y tomar decisiones autónomas sobre su futuro, reduciendo su dependencia de soluciones informales como prestamistas con tasas abusivas. Sin embargo, para que este acceso se traduzca en mayor autonomía y bienestar, es fundamental garantizar que la inclusión financiera no sea solo una apertura de cuentas o créditos, sino una vía efectiva para mejorar la calidad de vida y la participación en la economía formal.

Esto requiere una estrategia integral que combine educación financiera, digitalización accesible, regulaciones que fomenten la transparencia, el respeto de la privacidad, así como el acceso libre, opcional y sencillo a los diferentes medios y productos.

autoridades, atraer inversiones y mejorar la seguridad pública en beneficio de toda la sociedad.

Es momento de cerrar la brecha regulatoria y consolidar un sector de seguridad privada confiable, regulado y alineado con las necesidades del país. Estamos listos para contribuir con propuestas en la construcción de un México más seguro y ordenado.